KEPA AULESTIA

LÍNEAS DIVISORIAS

Quienes abogan por otra política penitenciaria deben precisar dónde tendrían que ser internados los reclusos hoy dispersos y qué nuevos criterios habrían de aplicarse para la progresión de grado

El problema de la violencia de ETA y las soluciones que se manejaban para superarlo provocaron durante años fuertes desavenencias entre las formaciones democráticas y entre las instituciones. Hasta el punto de que se convirtió en un socorrido recurso de la pugna partidaria. A la unánime condena de cada atentado mortal le seguía, a las pocas horas del asesinato, la diatriba sobre las causas del terrorismo y sus soluciones. De tal manera que el mal extremo acababa encubierto por ese otro mal que fue la especulación o el estraperlo banderizo a cuenta del terror.

Las circunstancias han cambiado tras la declaración de cese definitivo de ETA. El tema no posee la atracción irresistible de otros tiempos que, dicho sea de paso, eran más confortables en lo económico. Pero todas las formaciones políticas continúan buscando una parte de su identidad en el espejo de la cuestión etarra. Y ello a pesar de haberse demostrado que la única fuerza capaz de rentabilizar la desactivación de la violencia es precisamente la izquierda abertzale.

Sin embargo el encuentro entre el presidente Rajoy y el lehendakari López atenuó ayer la divisoria que parecía trazarse entre el gobierno central y el vasco respecto a la política a aplicar para el cierre definitivo del ciclo terrorista. Quizá también porque ambos dirigentes saben que la supuesta necesidad de hallar puntos de fricción que alimenten la competencia partidaria difícilmente puede convertirse en virtud cuando involucra a las instituciones en un asunto tan delicado. Rajoy se ha visto obligado a desconcertar demasiado a su propia gente en materia económica como para aventurarse en una modificación expresa y reivindicada de la política antiterrorista. Al tiempo que López, que desearía trazar una línea divisoria izquierda-derecha más nítida respecto a los populares, sabe que sería un sinsentido recrear la identidad socialista a partir del problema que dio carta de naturaleza a su entente con Basagoiti.

La estrategia de contención que instintivamente han adoptado el presidente Rajoy y el ministro Fernández pone a prueba el carácter unilateral y la irreversibilidad del proceso anunciado por ETA. Tanto su cese definitivo como la legalización de facto de la izquierda abertzale desbaratan la única baza que obligaría a reaccionar al nuevo gobierno: la amenaza 'verificable' de que la banda terrorista pudiera estar dispuesta a volver a matar.

Paradójicamente, es la convicción de que eso no ocurrirá lo que lleva al gobierno 'popular' a afrontar la cuestión con parsimonia y sin necesidad de mostrarse magnánimo. Una vez que cesan los atentados, la extorsión y la coacción ideológica, no es el Estado el que tiene prisa por poner fin a la existencia formal de ETA. En todo caso es ETA la que necesita una liturgia final para justificar su propio desistimiento y transferir a la izquierda abertzale los beneficios de una trayectoria exculpada en el ritual.

Al gobierno Rajoy se le reclama otra política penitenciaria; también se lo pidió ayer el lehendakari López. Es una demanda tan generalizada como difusa y poco comprometida, que en ocasiones evoca el acercamiento de los presos a sus lugares de origen y en otras parece exigir mucho más que beneficios penitenciarios. Es lógico que la izquierda abertzale y las organizaciones afines apuren las posibilidades de esa ambigüedad para reivindicar una escalonada dilución política de las responsabilidades penales contraídas por los terroristas. Simultanean la consigna 'Presoak Euskal Herrira' con la de 'Amnistia' porque en su concepción del conflicto la renuncia a las armas entraña el inmediato perdón de una culpa inexistente en virtud de la historia.

Por eso mismo las formaciones democráticas deberían exponer con mayor claridad qué entienden por una política penitenciaria adecuada a los nuevos tiempos y, en general, qué entienden por una política que acompase el final de ETA. Es un esfuerzo que también deberían realizar los socialistas, comenzando por el lehendakari López. Quienes periódicamente se refieren a la necesidad de arriesgarse para culminar el camino de la paz debieran hacerlo precisando dónde tendrían que ser internados los reclusos hoy dispersos y qué nuevos criterios habrían de aplicarse para la progresión de grado de todos ellos.

La incomprensible comprensión hacia las pautas y ritmos que ETA pretende establecer para protocolizar su paulatina desaparición afecta al conjunto de la política vasca, y ha llevado a la izquierda abertzale y a sus socios de Amaiur a indicar que la costumbre en la resolución de los conflictos violentos es que la entrega de las armas se realice al final. El Estado no tiene especial prisa en acabar con la existencia formal de ETA. Pero cuanto más se dilate y alambique el 'proceso' más interesante resultará para quienes aspiran a obtener algún rédito de una paz ritualizada.

El problema sigue siendo más sencillo de resolver de lo que el oportunismo pretende: basta con que la ya inexistente ETA admita que ya no existe. Y basta con que las demás formaciones recuerden a la izquierda abertzale y a sus aliados que ya han obtenido en las urnas la ventaja política que perseguían y con la que debieran contentarse sin pretender que se les conceda algún otro premio aparte del electoral. Pero mientras haya una 'comisión internacional de verificación' que las instituciones mantienen en el limbo de un reconocimiento informal, y mientras persista la creencia de que hay que atender a las demandas de la izquierda abertzale para impedir que obtenga beneficios electorales vía victimismo, la política vasca seguirá trazando líneas divisorias, aunque sean tenues, a cuenta de la pervivencia de ETA.